



Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Resolución 001818-2022-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA

Expediente : 01808-2022-JUS/TTAIP
Impugnante : **JUAN RAMOS PAIVA**
Entidad : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE**
Sumilla : Declara fundado el recurso de apelación

Miraflores, 4 de agosto de 2022

VISTO el Expediente de Apelación N° 01808-2022-JUS/TTAIP de fecha 18 de julio de 2022¹, interpuesto por **JUAN RAMOS PAIVA** contra la denegatoria por silencio administrativo negativo de su solicitud de acceso a la información pública presentada ante la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE** con fecha 27 de junio de 2022.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 27 de junio de 2022, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, el recurrente, Carta Múltiple N° 172-2022/JRP, solicitó a la entidad se le proporcione por correo electrónico información relativa a la obra *“RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMÓN RODRÍGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNIÓN, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PSJE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA – PIURA”*; requiriendo los siguientes documentos:

“(…)”

- 1. Del acta u otro documento a través del cual se acredite la designación y/o contratación del monitor y/o coordinador de la obra antes referida.*
- 2. Documento que acredite los lugares que autorizo el supervisor, para que sean utilizados como botaderos del material excedente, durante la ejecución de la obra, conforme lo establece el numeral 03.02, del expediente técnico de la referida obra.*
- 3. Acta u otro documento que acredite la reunión sostenida el día 25 de abril del 2022, entre la alcaldesa de la municipalidad distrital de Amotape, con el representante en Piura, de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios Martín Mejías Coronado., y pobladores del distrito de Amotape, donde existe un compromiso para la construcción de una alcantarilla.*

¹ Cabe precisar que en la misma fecha el recurrente presentó ante esta instancia el mismo recurso de apelación y sus anexos, registrado con Hoja de Trámite Interno N° 000272896-2022MSC, el cual se incorpora al expediente como anexo, sin variar en el sentido, al tratarse del mismo recurso de apelación.

4. *Contrato de servicio, entre José Manuel Puycan Maldonado con CIP N°118137, y la Municipalidad Distrital de Amotape, para la Elaboración del Expediente Técnico "RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BOLIVAR, CALLE GRAU, CALLE BOLOGNESI, CALLE PIURA, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR Y CALLE SIMÓN RODRIGUEZ AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE MOTAPE, PROVINCIA DE PAITA - PIURA". Así mismo, los Recibos de Honorarios profesionales emitidos por dicho profesional.*
5. *Informe N° 262-2020-JlyDUR-ING.JCNR de fecha 05 de agosto de 2,020 a través del cual se dio conformidad al servicio de consultoría por la elaboración del Expediente Técnico "RECONSTRUCCIÓN OE LA CALLE BOLIVAR, CALLE GRAU, CALLE BOLOGNESI, CALLE PIURA, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR Y CALLE SIMÓN RODRIGUEZ AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE MOTAPE, PROVINCIA DE PAITA-PIURA".*
6. *Resolución de Alcaldía N 0145-2020-MDA, /A que aprobó el Expediente Técnico "RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BOLIVAR, CALLE GRAU, CALLE BOLOGNESI, CALLE PIURA, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR Y CALLE SIMÓN RODRIGUEZ AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE MOTAPE, PROVINCIA DE PAITA-PIURA".*
7. *Oficio N°152-2020-MDA, /A, a través del cual se solicitó el financiamiento para la ejecución del proyecto de Inversión Pública "RECONSTRUCCIÓN OE LA CALLE BOLIVAR, CALLE GRAU, CALLE BOLOGNESI, CALLE PIURA, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR Y CALLE SIMÓN RODRIGUEZ AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE MOTAPE, PROVINCIA DE PAITA-PIURA". (sic)*

El 18 de julio de 2022, al considerar denegada la referida solicitud y en aplicación del silencio administrativo negativo por parte de la entidad, el recurrente, con Carta N° 187-2022/JRP interpuso ante esta instancia el recurso de apelación² materia de análisis.

Mediante la Resolución N° 001683-2022-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA³ se admitió a trámite el referido recurso impugnatorio, requiriendo la remisión del expediente administrativo generado para la atención de la solicitud impugnada, así como la formulación de sus descargos⁴, los cuales a la fecha de emisión de la presente resolución no han sido presentados.

II. ANÁLISIS

El numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido, exceptuando las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

² Cabe precisar que en la misma fecha el recurrente presentó nuevamente la Carta N° 187-2022/JRP, mediante la cual se interpuso el recurso de apelación, la cual contiene los mismos argumentos y anexos, al cual se le asignó la Hoja de Trámite N° 000272896-2022

³ Resolución de fecha 19 de julio de 2022, la cual fue debidamente notificada a la Mesa de Partes Virtual de la entidad: muniamotape19@gmail.com y mesadeparte@muniamotape.gob.pe, el 21 de julio de 2022 a horas 09:03, con confirmación de recepción automática en la misma fecha a horas 9:57, conforme la información proporcionada por la Secretaría Técnica de esta instancia, dentro del marco de lo dispuesto por el Principio de Debido Procedimiento contemplado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

⁴ Habiéndose esperado el cierre de la Mesa de Partes Física y Virtual correspondiente al día de hoy.

Por su parte, el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS⁵, establece que por el principio de publicidad toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones de ley, teniendo las entidades la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación de dicho principio.

Así también, el artículo 10 de la citada ley señala que las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.

De otro lado, el artículo 13 de la Ley de Transparencia, refiere que la solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido, por lo que en este caso, la entidad de la Administración Pública deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada.

Finalmente, el primer párrafo del artículo 18 de la Ley de Transparencia señala que las excepciones establecidas en los artículos 15, 16 y 17 del referido texto son los únicos supuestos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental.

2.1 Materia en discusión

De autos se aprecia que la controversia radica en determinar si la información requerida por el recurrente constituye información pública; y, en consecuencia, corresponde su entrega.

2.2 Evaluación

Sobre el particular, toda documentación que obra en el archivo o dominio estatal es de carácter público para conocimiento de la ciudadanía por ser de interés general, conforme lo ha subrayado el Tribunal Constitucional en el Fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente N° 4865-2013-PHD/TC indicando:

“(…)

5. *La protección del derecho fundamental de acceso a la información pública no solo es de interés para el titular del derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general. Por ello, los pedidos de información pública no deben entenderse vinculados únicamente al interés de cada persona requirente, sino valorados además como manifestación del principio de transparencia en la actividad pública. Este principio de transparencia es, de modo enunciativo, garantía de no arbitrariedad, de actuación lícita y eficiente por parte del Estado, y sirve como mecanismo idóneo de control en manos de los ciudadanos”.*

⁵ En adelante, Ley de Transparencia.

Al respecto, el artículo 3 de la Ley de Transparencia, que consagra expresamente el Principio de Publicidad, establece que *“Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por (...) la presente Ley”*. Es decir, establece como regla general la publicidad de la información en poder de las entidades públicas, mientras que el secreto es la excepción.

En esa línea, el Tribunal Constitucional en el Fundamento 8 de la sentencia recaída en el Expediente N° 02814-2008-PHD/TC, ha señalado respecto del mencionado Principio de Publicidad lo siguiente:

“(...)”

8. (...) *Esta responsabilidad de los funcionarios viene aparejada entonces con el principio de publicidad, en virtud del cual toda la información producida por el Estado es, prima facie, pública. Tal principio a su vez implica o exige necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a la documentación del Estado”.*

Sobre el particular cabe mencionar que, el Tribunal Constitucional ha señalado en el Fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente N° 3035-2012-PHD/TC, que:

“(...)”

5. *De acuerdo con el principio de máxima divulgación, la publicidad en la actuación de los poderes públicos constituye la regla y el secreto, cuando cuente con cobertura constitucional, la excepción, de ahí que las excepciones al derecho de acceso a la información pública deben ser interpretadas de manera restrictiva y encontrarse debidamente fundamentadas.* (subrayado agregado)

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional ha precisado que corresponde a las entidades acreditar la necesidad de mantener en reserva la información que haya sido solicitada por el ciudadano, conforme se advierte del último párrafo del Fundamento 13 de la sentencia recaída en el Expediente N° 2579-2003-HD/TC:

“(...)”

13. (...) *Como antes se ha mencionado, esta presunción de inconstitucionalidad se traduce en exigir del Estado y sus órganos la obligación de probar que existe un bien, principio o valor constitucionalmente relevante que justifique que se mantenga en reserva, secreto o confidencialidad la información pública solicitada y, a su vez, que sólo si se mantiene tal reserva se puede servir efectivamente al interés constitucional que la justifica. De manera que, si el Estado no justifica la existencia del apremiante interés público para negar el acceso a la información, 4 la presunción que recae sobre la norma o acto debe efectivizarse y, en esa medida, confirmarse su inconstitucionalidad; pero también significa que la carga de la prueba acerca de la necesidad de mantener en reserva el acceso a la información ha de estar, exclusivamente, en manos del Estado.* (Subrayado agregado)

Asimismo, con relación a los gobiernos locales, es pertinente señalar lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, al señalar que *“La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía,*

transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444 (...).” (subrayado nuestro), estableciendo de ese modo que uno de los principios rectores de la gestión municipal es el principio de transparencia.

En esa línea, el último párrafo del artículo 118 de la referida ley establece que *“El vecino tiene derecho a ser informado respecto a la gestión municipal y a solicitar la información que considere necesaria, sin expresión de causa; dicha información debe ser proporcionada, bajo responsabilidad, de conformidad con la ley en la materia.”* (subrayado nuestro).

Siendo ello así, la transparencia y la publicidad son principios que rigen la gestión de los gobiernos locales, de modo que la información que estas entidades posean, administren o hayan generado como consecuencia del ejercicio de sus facultades, atribuciones o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene, constituye información de naturaleza pública.

Dentro de ese contexto, el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de Transparencia establece que la solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido, en tal sentido, efectuando una interpretación contrario sensu, es perfectamente válido inferir que la administración pública tiene el deber de entregar la información con la que cuenta o aquella que se encuentra obligada a contar.

En el caso de autos, se advierte la Carta Múltiple N° 172-2022/JRP, a través de la cual el recurrente solicitó a la entidad se le proporcione por correo electrónico, información relativa a la obra *“RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES SAN MARTIN, CALLE GRAU, CALLE SIMÓN RODRÍGUEZ, CALLE BOLIVAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE UNIÓN, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR, CALLE PIURA, PSJE. LIBERTAD, CALLE PLAZA DE ARMAS Y CALLE S/N AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA - PIURA”*; requiriendo los siguientes documentos:

“(…)

1. Del acta u otro documento a través del cual se acredite la designación y/o contratación del monitor y/o coordinador de la obra antes referida.
2. Documento que acredite los lugares que autorizo el supervisor, para que sean utilizados como botaderos del material excedente, durante la ejecución de la obra, conforme lo establece el numeral 03.02, del expediente técnico de la referida obra.
3. Acta u otro documento que acredite la reunión sostenida el día 25 de abril del 2022, entre la alcaldesa de la municipalidad distrital de Amotape, con el representante en Piura, de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios Martin Mejías Coronado., y pobladores del distrito de Amotape, donde existe un compromiso para la construcción de una alcantarilla.
4. Contrato de servicio, entre José Manuel Puycan Maldonado con CIP N°118137, y la Municipalidad Distrital de Amotape, para la Elaboración del Expediente Técnico *“RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BOLIVAR, CALLE GRAU, CALLE BOLOGNESI, CALLE PIURA, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR Y CALLE SIMÓN RODRIGUEZ AFECTADAS POR EL*

FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE MOTAPE, PROVINCIA DE PAITA - PIURA". Así mismo, los Recibos de Honorarios profesionales emitidos por dicho profesional.

5. Informe N° 262-2020-JlyDUR-ING.JCNR de fecha 05 de agosto de 2,020 a través del cual se dio conformidad al servicio de consultoría por la elaboración del Expediente Técnico "RECONSTRUCCIÓN OE LA CALLE BOLIVAR, CALLE GRAU, CALLE BOLOGNESI, CALLE PIURA, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR Y CALLE SIMÓN RODRIGUEZ AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE MOTAPE, PROVINCIA DE PAITA-PIURA".
6. Resolución de Alcaldía N 0145-2020-MDA, /A que aprobó el Expediente Técnico "RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BOLIVAR, CALLE GRAU, CALLE BOLOGNESI, CALLE PIURA, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR Y CALLE SIMÓN RODRIGUEZ AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE MOTAPE, PROVINCIA DE PAITA-PIURA".
7. Oficio N°152-2020-MDA, /A, a través del cual se solicitó el financiamiento para la ejecución del proyecto de Inversión Pública "RECONSTRUCCIÓN OE LA CALLE BOLIVAR, CALLE GRAU, CALLE BOLOGNESI, CALLE PIURA, CALLE AURORA, CALLE HUASCAR Y CALLE SIMÓN RODRIGUEZ AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE MOTAPE, PROVINCIA DE PAITA-PIURA". (sic)

Al no obtener respuesta alguna, el recurrente consideró denegada la referida solicitud, por lo que, en aplicación del silencio administrativo negativo por parte de la entidad, interpuso ante esta instancia el recurso de apelación materia de análisis.

En cuanto a ello, cabe precisar que la entidad no ha descartado la posesión de la información solicitada; asimismo, tampoco ha alegado la existencia de una causal de excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información pública contemplado en la Ley de Transparencia, conforme lo exige el Tribunal Constitucional en el Fundamento 13 de la sentencia recaída en el Expediente N° 2579-2003-HD/TC, en cuanto señala lo siguiente:

"Como antes se ha mencionado, esta presunción de inconstitucionalidad se traduce en exigir del Estado y sus órganos la obligación de probar que existe un bien, principio o valor constitucionalmente relevante que justifique que se mantenga en reserva, secreto o confidencialidad la información pública solicitada y, a su vez, que sólo si se mantiene tal reserva se puede servir efectivamente al interés constitucional que la justifica. De manera que si el Estado no justifica la existencia del apremiante interés público para negar el acceso a la información, la presunción que recae sobre la norma o acto debe efectivizarse y confirmarse su inconstitucionalidad; y, consecuentemente, la carga de la prueba sobre la necesidad de mantener en reserva el acceso a la información ha de estar, exclusivamente, en manos del Estado". (subrayado nuestro)

En esa línea, atendiendo a que la entidad no ha manifestado y acreditado que dicha documentación se encuentre protegida por alguna excepción al derecho de acceso a la información pública previsto por la Ley de Transparencia, la

Presunción de Publicidad respecto del acceso a dicha documentación se encuentra plenamente vigente al no haber sido desvirtuada por la mencionada entidad.

A mayor abundamiento respecto al carácter público de la información solicitada debemos señalar que, esta se habría generado dentro de un proceso elaboración del expediente técnico de una obra pública, en ese sentido, es preciso enfatizar que la información sobre contrataciones de bienes y servicios es una información que la entidad debe publicar en su Portal de Transparencia Estándar, conforme lo señala el numeral 3 del artículo 5 de la Ley de Transparencia, conforme al siguiente texto:

“Artículo 5.- Publicación en los portales de las dependencias públicas

Las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información:

3. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos” (subrayado agregado).

En la misma línea, el literal j) del artículo 8 del Reglamento de la Ley de Transparencia establece que:

“Artículo 8.- La presentación de la información en el Portal de Transparencia y la obligación de incrementar los niveles de transparencia

Se publicará en el Portal de Transparencia Estándar además de la información a la que se refieren los artículos 5 y 25 de la Ley y las normas que regulan dicho portal, la siguiente información:

j. La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda”.

Con mayor detalle, los “Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública”, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD⁶, señala que dicha norma tiene por objeto “Establecer las disposiciones para una adecuada implementación y actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública, como herramienta de transparencia activa y proactiva, a efectos de garantizar el cumplimiento del principio de publicidad de la información, fomentando una cultura de transparencia y fortaleciendo la vigilancia ciudadana sobre los actos de la Administración Pública”, precisándose en el numeral 4.1 “PROYECTOS DE INVERSIÓN” de su Anexo I, que se debe publicar lo siguiente: “Información de los montos por concepto de adicionales de obra, liquidación final de obra y de los informes de supervisión, según corresponda”.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se debe tener en cuenta que la documentación requerida podría contar con información que se encuentre legalmente protegida, principalmente el contrato de servicio entre José Manuel Puycan Maldonado y la Municipalidad Distrital de Amotape, cuya divulgación o

⁶ Extraído del siguiente enlace: <http://www.minedu.gob.pe/transparencia/2021/pdf/R.D%20N%C2%B0%2011-2021-JUS-DGTAIPD%20-%20Aprueba%20Nuevo%20Lineamiento%20para%20la%20Implementaci%C3%B3n%20y%20Actualizaci%C3%B3n%20del%20PTE.pdf>

entrega en el marco de la Ley de Transparencia podría afectar su derecho a la intimidad personal y familiar.

Ahora bien, con relación a la protección de información de naturaleza íntima, el Tribunal Constitucional en los Fundamentos 6, 7, 8 y 9 de la sentencia recaída en el Expediente N° 04872-2016-PHD/TC, analizó la entrega de la ficha personal de una servidora pública, documento que contiene información de carácter público como son los estudios, especializaciones y capacitaciones realizadas, así como datos de carácter privado, entre otros, los datos de individualización y contacto, siendo posible tachar éstos últimos y de esa forma garantizar el acceso de la información a los ciudadanos, conforme el siguiente texto:

“(…)

6. De autos se advierte que la ficha personal requerida contiene tanto información de carácter privado como información de carácter público. En efecto, mientras que la información de carácter privado se refiere a datos de individualización y contacto del sujeto a quien pertenece la ficha personal; la información de carácter público contenida en el referido documento abarca datos que fueron relevantes para contratarla, tales como el área o sección en la que la persona ha desempeñado funciones en la Administración Pública; la modalidad contractual a través de la cual se le ha contratado; así como los estudios, especializaciones y capacitaciones realizadas.
7. No solamente no existe razón para limitar la entrega de información referida a las cualificaciones relevantes que fueron decisivas para la contratación de un empleado en la Administración Pública, sino que, hacerlo, desincentivar la participación ciudadana en la fiscalización de la idoneidad del personal que ingresa a ella.
8. Al respecto, no puede soslayarse que la ciudadanía tiene interés en contar con personal cualificado en la Administración Pública, por lo que impedirle el acceso a información relativa a las cualidades profesionales que justificaron la contratación del personal que ha ingresado a laborar en dicha Administración Pública, no tiene sentido. En todo caso, la sola existencia de información de carácter privado dentro de un documento donde también existe información de carácter público no justifica de ninguna manera negar, a rajatabla, su difusión.
9. Atendiendo a lo previamente expuesto, es perfectamente posible satisfacer el derecho que tiene la ciudadanía de acceder a la información de carácter público de quienes laboran dentro de la Administración Pública y, al mismo tiempo, proteger la información de carácter privado de dichas personas, tachando lo concerniente, por ejemplo, a los datos de contacto, pues con ello se impide su divulgación. Por consiguiente, corresponde la entrega de lo petitionado, previo pago del costo de reproducción”. (subrayado agregado)

En atención a lo expuesto, cabe destacar que en caso de existir en un documento información pública y privada, esta última debe separarse o tacharse a fin de facilitar la entrega de la información pública que forma parte del documento, ello acorde con el artículo 19 de la Ley de Transparencia, que señala: “En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, conforme a los artículos 15, 16 y 17 de esta Ley, no sea de acceso público, la entidad de la Administración Pública deberá permitir el acceso a la información disponible del documento”. (subrayado agregado).

En consecuencia, considerando que el carácter público de la información solicitada se mantiene vigente al no haber sido desvirtuado por la entidad, pese a que tiene la carga de la prueba; corresponde estimar el recurso de apelación presentado por el recurrente y ordenar a la entidad que proceda a la entrega de la información pública requerida, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución.

Finalmente, en virtud de lo previsto por el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Transparencia, en aplicación de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, corresponde a cada entidad determinar la responsabilidad en que eventualmente hubieran incurrido sus funcionarios y/o servidores por la comisión de presuntas conductas infractoras a las normas de transparencia y acceso a la información pública.

Asimismo, el artículo 4 de la Ley de Transparencia, señala que todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma y que los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que hace referencia el artículo 376 del Código Penal.

Además, el artículo 368 del Código Penal establece que el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

De conformidad con lo dispuesto⁷ por el artículo 6 y en el numeral 1 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1353; Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses; asimismo, ante la ausencia de la Vocal Titular de la Primera Sala María Rosa Mena Mena por motivo de vacaciones, interviene en la presente votación la Vocal Titular de la Segunda Sala de esta instancia Vanesa Vera Muenta⁸;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por **JUAN RAMOS PAIVA**; en consecuencia, **ORDENAR** a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE** que entregue la información pública solicitada por el recurrente conforme a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, bajo apercibimiento de que la Secretaría Técnica de esta instancia, conforme a sus competencias, remita copia de los actuados al Ministerio Público en caso se reporte su incumplimiento, en atención a lo dispuesto por los artículos 368 y 376 del Código Penal.

Artículo 2.- SOLICITAR a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE** que, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, acredite a esta instancia la entrega de dicha información a **JUAN RAMOS PAIVA**.

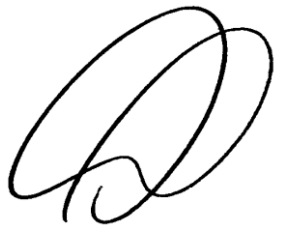
Artículo 3.- DECLARAR agotada la vía administrativa al amparo de lo dispuesto en el artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.

⁷ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

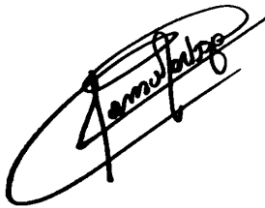
⁸ Conforme a lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, así como a la designación formulada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 de la Resolución N° 031200212020 de fecha 13 de febrero de 2020; así como lo acordado en el Acta de Sala Plena de fecha 3 de agosto de 2020.

Artículo 4.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la notificación de la presente resolución a **JUAN RAMOS PAIVA** y a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE**, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la norma antes citada.

Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional (www.minjus.gob.pe).



PEDRO CHILET PAZ
Vocal Presidente



ULISES ZAMORA BARBOZA
Vocal



VANESA VERA MUENTE
Vocal

vp: uzb